

LIBRO PRIMERO

CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS

CAPÍTULO I

APROXIMACIÓN LINGÜÍSTICA

I. LOS DERECHOS HUMANOS

El término «derechos humanos» es sin duda uno de los más usados en la cultura jurídica y política actual, tanto por los científicos y los filósofos que se ocupan del hombre, del Estado y del Derecho, como por los ciudadanos. No en vano se puede decir que tiene esa idea de derechos humanos, un significado similar al que tuvo en los siglos XVII y XVIII la de Derecho natural. Por su función reguladora de la legitimidad de los sistemas políticos y de los ordenamientos jurídicos, y por la convicción de muchos hombres de que constituyen una garantía para su dignidad, y un cauce, el cauce principal, para su libertad y su igualdad, la comprensión adecuada de los derechos es no sólo una tarea teórica, sino de un gran alcance práctico.

Es también, un término emotivo que suscita sentimientos entre sus destinatarios y respecto del cual la tentación de manipulación es permanente. Como

Al utilizar el término «derechos humanos» podemos estar refiriéndonos a una pretensión moral, o a un derecho subjetivo protegido por una norma jurídica, pero en el primer caso a la pretensión moral se le reviste de los signos de lo jurídico al llamarlo «derecho». Dicho de otra manera es un uso ambiguo que significa dos cosas distintas, que en la historia del pensamiento jurídico han expresado un enfrentamiento permanente, el punto de vista iusnaturalista y el positivista³. Pero la ambigüedad no se disipa teniendo en cuenta el contexto lingüístico en que aparecen las palabras y la situación humana dentro de la que son usadas como dice Carrió⁴, porque detrás de cada uno de los dos sentidos en que se usa la expresión «derechos humanos» existen unas tradiciones culturales no sólo dispares sino, en el límite, incompatibles.

Es difícil, por consiguiente, con un término tan extendido y con una ambigüedad que expresa dos ideas que chocan frontalmente, poder elaborar una reflexión sobre el concepto y el fundamento de los derechos. Es más, en realidad este fenómeno de los derechos humanos como veremos supone una dimensión moral y una jurídica de Derecho positivo al mismo tiempo, y la pretensión antitética que puede desprenderse de los dos usos que encontramos, «derechos» que no necesitan al Derecho positivo, y derechos positivizados cuya raíz ética no se tiene en cuenta o al menos no se subraya suficientemente, son formulaciones reduccionistas que engañan y enmascaran su sentido integral⁵.

«Derechos Humanos» no es la expresión adecuada y aquí el consentimiento universal, que se desprende de su utilización generalizada, no es razón para aceptarla como base de un proceso de reflexión que lleve a la comprensión de lo que se quiere identificar. Sin embargo, podemos explicar su éxito y su extensión que representa un anhelo generalmente sentido por los hombres en la historia moderna. Y también que en el primer sentido se use «derecho» para reforzar la presión de la pretensión moral y su vocación de ser «Derecho positivo». En todo caso, tenemos que coexistir con una utilización tan difundida, intentando explicar los límites del uso de este tipo de lenguaje, y sobre todo, tenemos que evitar que esta definición, basada en lo que se dice en el len-

³ Vid. sobre este tema mi libro *Introducción a la Filosofía del Derecho*, Debate, Madrid, 1983. Vid. asimismo, BOBBIO, N., *Iusnaturalismo e positivismo jurídico*, Edizioni di Comunità, Milán, 1965, y CARRIÓ, G., *Un intento de superación de la controversia entre positivistas e iusnaturalistas*, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986.

⁴ Vid. «Notas sobre Derecho y lenguaje», citado, p. 29.

⁵ Estamos ante un caso de polisemia lingüística de una palabra que pertenece al lenguaje natural, pero que tiene además un significado específicamente jurídico en el uso del término «derechos humanos» en su segundo sentido. Vid. SOURIOUX, J. L., y LERAT, T. P., *Le langage du Droit*, citado, p. 91.

guaje natural, sea el punto de partida para justificar otros términos, pretendidamente más sólidos, con los que expresar la idea de derechos humanos.

Si descartamos como lenguaje base para uso más riguroso el término «derechos humanos» habrá que ver si alguno de los otros términos utilizados es adecuado o si se tiene que estipular un término, o un sentido específico a un término preexistente para poder continuar nuestra indagación.

2. DERECHOS NATURALES

El uso del término «derechos naturales» se identifica con una posición iusnaturalista, incluso situada en momentos históricos anteriores, y supone una terminología anticuada y en relativo desuso. En efecto, el iusnaturalismo contemporáneo utiliza otros términos como el ya señalado de «derechos morales» al que nos referiremos posteriormente, aunque todavía se encuentran en España defensores del término derechos naturales⁶, y también en la cultura jurídica anglosajona⁷. En el origen de la historia de los derechos humanos, éstos aparecían como derechos naturales y en las primeras Declaraciones liberales del siglo XVIII en los modelos americano y francés encontramos consagrada esta expresión como la habitual para designar a los derechos del hombre. Como sinónimo de derechos naturales, algunos textos utilizan la expresión «Derechos innatos»⁸, o derechos inalienables⁹. De «derecho natural», y en sentido subjetivo habla la Declaración de Derechos y Normas Fundamentales de Delaware¹⁰ y de «derechos naturales», con los adjetivos inalienables y sagrados, la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el Preámbulo y en el artículo segundo coexistiendo esa terminología con la de «derechos del hombre», que se utiliza en el Preámbulo, «derechos del hombre y del ciudadano» que se utiliza en el título y en el artículo doce¹¹. Ésta será la

⁶ Vid. FERNÁNDEZ-GALLIANO, A., *Derecho Natural. Introducción Filosófica al derecho*, Ed. Centro de Estudios Areces, 5.ª edición, Madrid, 1989. En el mismo sentido su obra con CASTRO CID, B., de *Lecturas de Teoría del Derecho y Derecho Natural*, Universitat, S. A., Madrid, 1993. De todas formas, aunque se sigue defendiendo la idea de derechos que existen «por el mero hecho de ser hombre, de participar de la naturaleza humana» (p. 423), la terminología se cambia y se utiliza la de derechos fundamentales, ya en esta obra y también en la edición citada del *Derecho Natural*. También el prof. MACÍÀ MANSO, R., se decanta por la expresión «derechos naturales del hombre». Vid. «Fundamentación, consistencia y realización de los derechos humanos», en *Persona y Derecho*, núm. 23, 1990, p. 145.

⁷ Vid. FINNIS, J., *Natural Law and Natural Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1.ª ed., 1980.

⁸ En este supuesto se encuentra la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 12 de junio de 1776 en su artículo primero (Vid. *Derecho positivo de los derechos humanos*, Debate, Madrid, 1987, p. 101).

⁹ Esta expresión se encuentra en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 4 de julio de 1776 (Vid. PECES-BARBA, G., HIERRO, L., INIGUEZ DE ONZONO, J., y LLAMAS, A., *Derecho positivo de los derechos humanos*, citado, p. 107).

¹⁰ 11 de septiembre de 1776, artículo 2 (Vid. *Derecho positivo*..., citado, p. 110).

¹¹ Vid. el texto en *Derecho positivo*..., citado, pp. 111 y siguientes.

de partida positivista lógico²¹, desde el pensamiento nacionalsocialista en Siebert o Larenz²², han puesto en entredicho, con mayor o menor fortuna el término «derecho subjetivo», e incluso una propuesta de revisión crítica del concepto en Hohfeld que puede poner en entredicho una simplista identificación entre derechos humanos y derechos públicos subjetivos, aconsejan distanciarse de este término, que ofrece más dificultades que ventajas para impulsar la reflexión y la práctica de los derechos humanos²³.

Además este término circunscribe a los derechos, como límites al poder y sólo esgrimibles, por consiguiente, ante los poderes, autoridades y funcionarios, pero no en las relaciones entre particulares, mientras que el concepto anteriormente analizado de «derechos naturales» se planteaba, en su origen, siempre entre iguales en el estado de naturaleza, donde no existía poder. Así la escuela de Derecho público alemán, marcará en ese sentido a la doctrina y al Derecho positivo alemán de los derechos fundamentales, con una exclusión de los derechos en las relaciones de Derecho privado, al menos prima facie, como tendremos ocasión de ver al estudiar ese tema.

La dificultad no estriba sólo en el componente técnico jurídico del concepto, ni en su falta de aceptación generalizada en la cultura jurídica actual, sino en que, como señala Pérez Luño, se trata «de una categoría histórica adaptada al funcionamiento de un determinado tipo de Estado, el liberal, y a unas condiciones materiales que han sido superadas por el desarrollo económico-social de nuestro tiempo...»²⁴. Los derechos humanos en el Estado social, que son los que hoy nos encontramos, con una función promocional del Derecho y con unos derechos de crédito para exigir comportamientos positivos de los poderes públicos, difícilmente se pueden encuadrar en la categoría de los derechos públicos subjetivos.

Razones de comunicación generalizada de la idea de derechos humanos que no se obtiene con una herramienta lingüística creada desde el pensamiento jurídico, de impugnación de un estatuto científico por un sector relevante de

²¹ Vld. MONTORO, A., *Sobre la revisión crítica del Derecho subjetivo desde los supuestos del Positivismo lógico*, Universidad de Murcia, 1983.

²² Vld. LA TORRE, M., *La Lotta contro il Diritto soggettivo*, Karl Larenz e la dottrina giuridica nazional-socialista, Giuffrè, Milán, 1988.

²³ HOHFELD, W. N., *Some fundamental legal conceptions as applied to judicial reasoning*, Yale Law Journal, 16, New Haven, Connecticut, 1913. Hay traducción castellana de G. Carrió, «Conceptos jurídicos fundamentales», en Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1968. Es muy útil una versión italiana «Concetti giuridici fondamentali», publicada por M. Losano en Einaudi, Turín, 1969, con dos trabajos sobre Hohfeld de Cook y de Moritz. En España ATIENZA, M., ha aplicado los criterios de Hohfeld a la clasificación de los derechos humanos, «Una clasificación de los derechos humanos», *Anuario de Derechos Humanos*, n.º 4, Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complutense, Madrid, 1986/87, pp. 29 a 43.

²⁴ *Derechos humanos. Estudio de Derecho y Constitución*, citada, p. 34.

la doctrina, y de falta de adecuación a la situación actual de los derechos humanos en el Estado social, impiden que este término pueda ser escogido para expresar el núcleo del problema, sin perjuicio de que en el interior del razonamiento de los operadores jurídicos se usa y se seguirá usando para denominar a los «derechos humanos».

4. LIBERTADES PÚBLICAS

En su formulación precisa este término se sitúa en el ámbito de la doctrina francesa y también, como en el caso de «derechos públicos subjetivos», en una dimensión positivista, probablemente como reacción frente a la ambigüedad del término derechos del hombre, situado en la tradición revolucionaria de 1789 con una clara impronta iusnaturalista²⁵. Se pretende identificar, con unos derechos, reconocidos en el sistema jurídico, eficaces y protegidos por los jueces. Frente al espíritu, sin fuerza, las libertades públicas expresan un espíritu, una moralidad apoyada por la fuerza del Derecho positivo. Podríamos decir, que con los rasgos propios de la cultura jurídica francesa, viene a significar lo mismo que derechos públicos subjetivos para la alemana, aunque con mayor capacidad de expansión, por su inferior tenor técnico-jurídico, y por su mayor vinculación con un lenguaje natural con arraigo en la cultura europea.

En efecto, el término «libertades» se usa junto con el término «privilegios», y a veces con «derechos» y «franquicias», en textos premodernos, y de los primeros siglos de la modernidad (XVI y XVII), para significar los derechos corporativos de los gremios, de los órdenes sociales, de los habitantes de las ciudades, de ahí que se usase junto y casi como sinónimo de privilegios. Más tarde, a partir del tránsito a la modernidad, «libertades» extiende su uso para referirse a derechos individuales. Encontramos ya el término libertades en la Carta Magna de 1212, para todos los hombres libres —número I—, para la Ciudad de Londres y para las demás ciudades, villas y puertos —número 13—, en la «Petición de Derechos» de 1628 (n.º III y n.º XI), e incluso al-
gún texto del XVII se denomina «Cuerpo de libertades, como el de la Bahía de Massachusetts de 1641»²⁶. La denominación «libertades» se sitúa más bien

²⁵ Así lo reconoce MORANGE, J., que compara «libertades públicas» con «derechos del hombre», término que alude a unos sistemas de valores muy distintos, por lo que hay, dice, una gran distancia entre la ética y un sistema jurídico más o menos coherente. Las «libertades públicas» tienen la ventaja de constituir una realidad jurídica. (Vld. *Libertés publiques*, PUF, París, 1985, p. 12).

²⁶ Vld. estos textos y otros que recogen la expresión libertades en *Derecho positivo de los derechos humanos*, citado.

democrático, que sobrevive a las leyes y sentencias contrarias. Para resumir su teoría dirá:

«... Nuestro sistema constitucional descansa sobre una determinada teoría moral, a saber, que los hombres tienen derechos morales en contra del Estado... El Derecho constitucional no podrá hacer auténticos avances mientras no aísle el problema de los derechos en contra del Estado. Ello requiere una fusión del Derecho constitucional y la teoría de la ética, una vinculación que, por increíble que parezca, todavía está por establecerse...»³¹.

Esta terminología de derechos morales está muy arraigada en la cultura anglosajona, incluso autores como Hart, del que distinte Dworkin por considerarlo defensor del modelo positivista, sostiene el término «derechos morales» en su trabajo, «Are there any natural rights?» de 1955³², rechazando la posibilidad de que se siga impugnando esa terminología³³.

Para este planteamiento, tener un derecho moral es «concebir los derechos como poseídos por o como pertenecientes a individuos, y estas expresiones reflejan aquella concepción de las reglas morales con arreglo a la cual, éstas no se limitan a prescribir conductas, sino que, además constituyen un tipo de propiedad moral de los individuos, a la que éstos tienen título en tanto que individuos...»³⁴.

³¹ Vid. *Los derechos en serio*, trad. de M. Guastavino, con estudio introductorio de A. Calamigaglia, Ariel, Barcelona, 1984, p. 230 y 233. Las tesis de Dworkin están en el capítulo 4 de la obra *Los casos difíciles*, y en el 5.º Como veremos la conexión Derecho y Teoría de la Ética tiene otras posibilidades de conexión, que Dworkin no conoce y que se han experimentado en la cultura jurídica Europea. Sólo la desconsideración por el pensamiento europeo continental y consiguientemente su desconocimiento, pueden llevar a esas conclusiones.

³² *Philosophical Review*, Volumen 64, 1955, n.º 2, pp. 175 a 191. Hay traducción castellana con estudio introductorio de Genaro Carrón, en el volumen *Derecho y Moral. Contribuciones a su análisis*, De Palma, Buenos Aires, 1962.

³³ «... Quizá pocos han de negar hoy, como algunos los hicieron, que hay derechos en el campo moral, porque aquella negativa tenía usualmente por mira objetar alguna pretensión filosófica acerca del "status ontológico" de los derechos, y dicha objeción es ahora expresada, no como una negación de que haya derechos en el campo moral, sino como una negación de alguna supuesta semejanza lógica entre las proposiciones usadas para invocar la existencia de derechos y proposiciones de otro tipo...» (obra citada, p. 67). También en una visita a Madrid en abril de 1988 tuve ocasión de discutir personalmente el tema con el profesor Hart, quien ratificó su defensa de la expresión derechos morales, compatible con sus serias discrepancias con los planteamientos del profesor Dworkin. Esencialmente coincide en situar en Hart el origen consolidado de la terminología, el Prof. ROJO, en su trabajo «Los derechos morales en el pensamiento anglosajón», *Anuario de Derechos Humanos*, n.º 5, citado, pp. 231 a 249, aunque recuerda una mención de MILL, J. S., en *El utilitarismo*. Consultada la versión castellana de Esperanza Guisán en Alianza Editorial, Madrid, 1984, aparece la referencia en pp. 104 y 105: «... Cuando, sin embargo, se considera que una ley es injusta, parece que siempre obedece a que se sigue el mismo criterio que para considerar injusto el quebrantamiento de una ley, a saber, la violación del derecho de una persona, derecho que como en este caso, no puede ser de tipo legal, recibe una calificación diferente, siendo denominado como derecho moral...».

³⁴ HART, H. L. A., *Derecho y Moral*..., citada, p. 77. En la misma línea LOMASKY, L., dice «... the core of this notion is that each person possesses a kind of sovereignty over his own life and that such sovereignty entails that he be accorded a zone of protected activity within in which he is to be free from encroachment by others. En *Persons Rights and the Moral Community*, Oxford University Press, New York y Oxford, 1987, p. 11. Se puede citar otras muchas obras de autores ingleses, así WHITE, A., *Rights*, Clarendon Press, Oxford, 1985, y otros que PÁRAMO, J. R. de, cita en su interesante bibliografía recogida en «El Concepto de derecho: Una introducción bibliográfica», *Anuario de Derechos Humanos*, n.º 4, citado, pp. 199 y siguientes.

En España, esta terminología es asumida por autores como Eusebio Fernández³⁵. Antonio Pérez Luño indicará, que hablar de derechos morales es adoptar una posición iusnaturalista que él comparte, abierta a la historia y flexible, y como veremos, aunque el profesor Eusebio Fernández haga un esfuerzo por distinguir ambas y exprese también su interés por las dimensiones históricas, esta identificación entre derechos morales y derechos naturales es bastante común en el pensamiento anglosajón³⁶.

Una línea más racionalista, que rechaza las dimensiones históricas, y que reivindica unos derechos morales universales, absolutos e inalienables, como es el caso del profesor Laporta, aparece también en España, con su trabajo «Sobre el concepto de derechos humanos», que se presentó inicialmente como ponencia en un Congreso de profesores de Filosofía del Derecho, celebrado en Alicante en diciembre de 1987³⁷. Complementario de este trabajo es el del profesor Ruiz Miguel «Los derechos humanos como derechos morales. Entre el problema verbal y la denominación confusa»³⁸, donde el Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid rebate algunas críticas al concepto de derechos morales y reivindica su utilización como sinónimo más preciso del término derechos humanos.

Pero probablemente, la introducción de esa terminología en la cultura jurídica de lengua española, se debe al profesor argentino Carlos Santiago Nino con su obra «Ética y Derechos Humanos»³⁹, en una formulación más amplia y justificada que las anteriores, en las que, sin duda, ha influido, aunque se separe de algunos planteamientos, como el carácter incondicional y universal de los derechos.

No es éste el momento adecuado para reflexiones sobre los contenidos y las consecuencias de este concepto de derechos morales, aunque por la importancia que ha adquirido, deberá ser analizado en otro apartado de este capítulo. Se trata aquí solamente de decidir si estamos ante el término lingüís-

³⁵ Vid. su obra *Teoría de la Justicia y Derechos Humanos*, citada.

³⁶ La tesis de PÉREZ LUÑO en su obra *Derechos Humanos. Estado de Derecho y Constitución*, ya citada, p. 179.

³⁷ Se publicó posteriormente en la revista *Doxa*, n.º 4, Alicante, 1987, en un número homenaje a Ernesto Garzón Valdés, pp. 23 a 46.

³⁸ En el libro MUÑOZ (y otros), *El fundamento de los derechos humanos*, ed. a cargo de G. Peces-Barba, Debate, Madrid, 1989, pp. 321 a 326. Posteriormente ha publicado una versión revisada y ampliada con el título de «Los derechos humanos como derechos morales», en *Anuario de Derechos Humanos*, n.º 6, Madrid, 1990, pp. 149 y siguientes.

³⁹ Editorial Asirca, Buenos Aires, 1984, 2.ª edición ampliada y revisada Ariel, Barcelona, 1989. Existe edición inglesa posterior *The ethics of human rights*, Clarendon Press, Oxford, 1991. Puede verse una última reflexión de este autor sobre este tema en su trabajo «Sobre los derechos humanos», en *Doxa*, núm. 7, Alicante, 1990, pp. 311 y ss.

distinción entre Derecho y moral, que vino a superar el dogmatismo y la tentación de la imposición por la fuerza de las verdades morales. El profesor Eusebio Fernández, en una lectura de este texto, ha sugerido que, por el contrario, el término «derechos morales» supone un reforzamiento de la protección de la conciencia. Es una observación aguda pero que no disuelve el reproche de una confusión no descabale entre Derecho y moral. La distinción no es separación, y se puede concebir una moralidad que genera unas pretensiones morales con vocación de incorporarse al Derecho positivo, puente entre la ética y el Derecho, que explican la génesis real de los derechos humanos, sin acudir a ese término. La insistencia en su uso puede llevar a la idea de que estamos ante algo más que una mera disputa verbal. En todo caso, aunque sea ir contra corriente, parece preferible mantenerse en una terminología más acorde con la tradición de nuestra cultura jurídica.

6. DERECHOS FUNDAMENTALES

Hasta ahora hemos analizado términos con pretensión de abarcar el fenómeno de los derechos en su integridad. Existen otros términos, como derechos sociales, derechos individuales, derechos civiles, derechos políticos o derechos ciudadanos o del ciudadano, que se usan habitualmente en el lenguaje natural, aunque con una polisemia lingüística pueden tener sentidos más precisos o más acotados en el lenguaje jurídico, y son ejemplos de interferencias de esas dos dimensiones: la natural y la técnica. En todo caso, además, se refieren a parcelas o sectores de la realidad de los derechos y, bien por los titulares, como es el caso de derechos del ciudadano o de derechos individuales, o por los contenidos, como en los derechos sociales o en los políticos, no se extienden a todas sus posibles facetas.

Desde que inicié, entonces casi en solitario, el estudio de estos temas, tengo preferencia por «derechos fundamentales», como forma lingüística más precisa y procedente⁴². Las razones que entonces motivaron esta decisión y que hoy no sólo permanecen, sino que se han fortalecido ante el panorama lingüístico que acabo de presentar, son las siguientes:

⁴² Vid. *Derechos fundamentales*, 1.ª ed., Guadalupe, Madrid, 1973, 4.ª ed. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1983, pp. 13 y siguientes. Ese libro, donde inicié hace diez y siete años mi reflexión sobre estos temas, está hoy a mi juicio superado en sus reflexiones generales y es insuficiente para abarcar todos los problemas que supuso en España la aprobación de la Constitución de 1978. Por eso, aunque es pionero, me parece honesto intelectualmente dejarlo reposar como un esfuerzo del pasado.

a) Es más precisa que la expresión derechos humanos y carece del lastre de la ambigüedad que ésta supone.

b) Puede abarcar las dos dimensiones en las que aparecen los derechos humanos, sin incurrir en los reduccionismos iusnaturalista o positivista.

Es evidente que todo término del lenguaje supone la estipulación de un sentido, y que ninguno responde a una esencia material de la que es inseparable. Sin embargo, sí se explican en un contexto cultural más amplio que favorece o dificulta un determinado uso del lenguaje. Es más difícil implantar un término contra la corriente de las tradiciones del pensamiento, del uso lingüístico de los especialistas, en este caso de los operadores jurídicos, también de los ciudadanos. Entendiendo con flexibilidad lo anterior, derechos fundamentales puede comprender tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que conviene a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica⁴³.

c) Es más adecuado que los términos «derechos naturales» o «derechos morales» que mutilan a los derechos humanos de su faceta jurídico-positiva, o dicho de otra forma, que formulan su concepto sin tener en cuenta su dimensión jurídico-positiva. Las tradiciones lingüísticas de los juristas atribuyen al término «derechos fundamentales» esa dimensión vinculándola a su reconocimiento constitucional o legal.

d) Es más adecuado que los términos «derechos públicos subjetivos» o «libertades públicas» que pueden perder de vista la dimensión moral, y ceñir la estipulación del sentido a la faceta de la pertenencia al Ordenamiento.

Su proximidad con el término «derechos humanos», salvando su ambigüedad, permite usar «derechos fundamentales» abierto a esa primera e imprescindible dimensión ética que se pierde con una excesiva orientación consuetudinista o administrativa a la que se reduciría la idea de los derechos con la terminología «libertades públicas» o «derechos públicos subjetivos».

⁴³ En ese sentido puede integrar las dos dimensiones que llevan al profesor PÉREZ LUÑO a reservar el término «derechos humanos» para la moralidad y «derechos fundamentales» para la juridicidad. Por las razones críticas al uso por el pensamiento jurídico de la expresión «derechos humanos» que hemos formulado, no parece aconsejable seguir esa propuesta. En todo caso su análisis, aceptando la imprecisión del término derechos humanos, se aproxima a la que aquí sostenemos, aunque no impugna el uso del término «derechos» en ese caso (Vid. *Los derechos fundamentales*, 3.ª ed., Tecnos, Madrid, 1988, pp. 44 a 51).